

### III. Otras disposiciones

#### MINISTERIO DE JUSTICIA

6079

ORDEN de 1 de febrero de 1983 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona en los recursos números 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91 del año 1982, interpuestos por los señores que se citan.

Ilmo. Sr.: En los recursos contencioso-administrativos con números 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91 del año 1982, seguidos en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona por don Rafael Castro Domínguez, doña María Concepción Mirones Bizcarrondo, don Basilio García Carriazo, doña Trinidad Basterrechea Barrena, doña María Teresa Iñarra Sáez de Jáuregui, doña María Asunción Asteasu Basterrechea, doña María Mercedes Eraso Álvarez, doña Severiana Aramburu Lasaga, don Juan Agustín Caveró González, doña María Luisa Barrena Santamaría, don Ildefonso Pérez Sánchez, don Doroteo Iizarbe Saralegui y don Manuel Monzón Sánchez, contra la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre liquidación de la cuantía de los trienios efectuada a los interesados por el Habilitado, por no haber sido practicada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 70/1978, de 29 de diciembre, al no haberles sido aplicada la cuantía que a la proporcionalidad é les corresponde como Auxiliares Diplomados de la Administración de Justicia y ante el silencio administrativo aplicado a la reclamación de los referidos Auxiliares, se ha dictado sentencia por la mencionada Sala, con fecha 18 de diciembre de 1982, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que, estimando el recurso interpuesto por don Rafael Castro Domínguez, doña María Concepción Mirones Bizcarrondo, don Basilio García Carriazo, doña Trinidad Basterrechea Barrena, doña María Teresa Iñarra Sáez de Jáuregui, doña María Asunción Asteasu Basterrechea, doña María Mercedes Eraso Álvarez, doña María Luisa Barrena Santamaría, don Ildefonso Pérez Sánchez, don Doroteo Iizarbe Saralegui y don Manuel Monzón Sánchez, contra la denegación por silencio administrativo dirigido a la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, sobre liquidación de trienios, debemos anular y anulamos dicha denegación por su disconformidad a derecho y declaramos que los demandantes tienen derecho a que por dicho Ministerio de Justicia les sean abonadas las cantidades siguientes:

- R. 79/82. D. Rafael Castro Domínguez: 80.720 pesetas.  
 R. 80/82. D. Basilio García Carriazo: 18.460 pesetas.  
 R. 81/82. D.ª María Concepción Mirones Bizcarrondo: 70.560 pesetas.  
 R. 82/82. D.ª Trinidad Basterrechea Barrena: 94.080 pesetas.  
 R. 83/82. D.ª María Teresa Iñarra Sáez de Jáuregui: 39.230 pesetas.  
 R. 84/82. D.ª María Asunción Asteasu Basterrechea: 39.240 pesetas.  
 R. 85/82. D.ª María Mercedes Eraso Álvarez: 149.640 pesetas.  
 R. 86/82. D.ª Severiana Aramburu Lasaga: 108.040 pesetas.  
 R. 87/82. D. Juan Agustín Caveró González: 35.280 pesetas.  
 R. 88/82. D.ª María Luisa Barrena Santamaría: 108.040 pesetas.  
 R. 89/82. D. Ildefonso Pérez Sánchez: 7.260 pesetas.  
 R. 90/82. D. Manuel Monzón Sánchez: 35.280 pesetas.  
 R. 91/82. D. Doroteo Iizarbe Saralegui: 16.620 pesetas.

Sin imposición de costas en el presente recurso.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos (firmada y rubricada).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada condena.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 1 de febrero de 1983.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

6080

ORDEN de 1 de febrero de 1983 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso número 51.485, al que fueron acumulados los siguientes con los números 51.486 al 511.542 y los comprendidos entre los números 511.543 al 511.679, ambos inclusive, interpuesto por don Luis Pérez-Lemaur García y 188 más.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo con el número 511.485, al que fueron acumulados los siguientes con los números 511.486 al 511.542 y los comprendidos entre los números 511.543 al 511.679, ambos inclusive, interpuesto por don Luis Pérez-Lemaur García, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid; don Juan Latour Brotons, Magistrado del Tribunal Supremo; don Luis Vivas Mursá, Magistrado del Tribunal Supremo; don Manuel García Miguel, Magistrado del Tribunal Supremo; don Fernando Cotta y Márquez de Prado, Magistrado del Tribunal Supremo; don Antonio Huerta y Álvarez de Lara, Magistrado del Tribunal Supremo; don José Hijas Palacios, Magistrado del Tribunal Supremo; don Bernardo Francisco Castro Pérez, Magistrado del Tribunal Supremo; don Mariano Gómez de Liaño y Cobeleda, Magistrado del Tribunal Supremo; don Benjamín Gil Sáez, Magistrado del Tribunal Supremo; don José Luis Ruiz Sánchez, Magistrado del Tribunal Supremo; don Jaime Rodríguez Hermida, Magistrado del Tribunal Supremo; don Eduardo Torres-Dulce Ruiz, Magistrado del Tribunal Supremo; don Jerónimo Barneuve Asensi, Magistrado del Tribunal Supremo; don Antonio Torres Dulce Ruiz, Magistrado de la Audiencia Territorial; don Enrique García Sánchez, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid; don Antonio Martínez Carrera, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid; don José María Saucedo Ortega, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid; don Juan García-Murga Vázquez, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid; don José Ruiz Berdejo Sioniz, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid; don José López Borrascas, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid; don Manuel Sáez Adán, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid; don Bienvenido Guevara Suárez, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid; don Antonio Rodríguez Rodríguez, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid; don Enrique Ruiz Gómez de Bonilla, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid; don Miguel Álvarez Tejedor, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid; don Ricardo Varón Cobos, Magistrado; don Alfonso Barcalá y Trillo Figueroa, Magistrado; don José Carlos Divar Blanco, Magistrado; don Angel Llamas Amestoy, Magistrado; don Luis Fernando Martínez Ruiz, Magistrado; don Francisco Saborit Marticoreno, Magistrado; don Nicanor Fernández Puga, Magistrado; don José Manuel Martínez Pereda Rodríguez, Magistrado; don José Antonio García-Aguilera Bazaga, Magistrado; don José Antonio Jiménez Alfaro Giralt, Magistrado; don Miguel López-Muñiz Goñi, Magistrado; don Javier Ferrer Mora, Magistrado; don Fermín Sanz Villuendas, Magistrado; don Julián Domingo Salgado Díez, Magistrado; don Germán Fuertes Bartolín, Magistrado; don Antonio Crespo Nazara, Magistrado; don José Álvarez Domínguez, Magistrado; don Manuel Álvarez Díaz, Magistrado; don César Álvarez Linera-Uría, Magistrado; don Manuel Rubido Velasco, Magistrado; don Gumersindo Francisco Carracedo Fuentes, Magistrado; don Manuel Domínguez Viguera, Magistrado; don Emilio Fernández Castro, Magistrado; don Julio Márquez de Prado Pérez, Magistrado; don Pablo Maqueda Ibáñez, Magistrado; don José Antonio Vesteiro Pérez, Magistrado; don Fernando Ortiz Montoya, Magistrado; don Ruperto Martínez Morales, Magistrado; don Carlos Morenilla Rodríguez, Magistrado; don Juan Angel Rodríguez Cardana, Magistrado; don Juan Segoviano Hernández, Magistrado; don Policarpo Cuevas Trilla, Magistrado; don Vicente Capúa-Rodeja y Fernández, Magistrado; don Fernando Méndez Rodríguez, Magistrado; don Salvador Fernández San-silvestre, Magistrado; don José Baró Aleixandre, Magistrado; don Andrés Martínez de Salas y Cayuela, Magistrado; don Felipe de la Cueva Vázquez, Magistrado; don Fernando Anaya Pérez, Magistrado; don Antonio del Moral Martín, Magistrado; don Manuel Martínez Liebres, Magistrado; don Antonio Lomba Veghison, Magistrado; don Gumersindo Burgos y Pérez de Andrade, Magistrado; don Antonio Ferrín Castellanos, Magistrado; don Gonzalo Mendoza Esteban, Magistrado; don Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Magistrado; don Antonio García Rodríguez Acosta, Magistrado; don Manuel Cacho Mendoza, Abogado Fiscal del Tribunal Supremo; don José González Chacón, Abogado Fiscal del Tribunal Supremo; don Eugenio Antonio de Herrera Martín, Fiscal del Tribunal Supremo; don Fernando Jiménez La Blanca, Fiscal del Tribunal Supremo; don Luis Jiménez-

Clavería Dalvo-Rubio, Fiscal del Tribunal Supremo; don Pedro Claver de Vicente Tutor, Abogado Fiscal del Tribunal Supremo; don Vicente Mora Piñán, Fiscal general de la Audiencia Territorial de Madrid; don Andrés Collado Cortés, Fiscal; don Melitino García Carrero, Abogado Fiscal; don Rogelio Gómez Guillamón, Abogado Fiscal; don Lorenzo Gallardo Sandoval, Abogado Fiscal; don Juan Casáreo Ortiz Urculo, Abogado Fiscal; don Francisco Valdelomar de Prado, Abogado Fiscal; don José Antonio Zarzalejo Altares, Fiscal; don Jesús Silva Porto, Abogado Fiscal; don José Alvarado Ruiz, Abogado Fiscal; don Lisardo Fuentes Bullido, Abogado Fiscal; don Francisco Hernández Gil, Abogado Fiscal; don José Aparicio Calvo-Rubio, Abogado Fiscal; don José Julián Hernández Guijarro, Abogado Fiscal; don Manuel Lamela López, Abogado Fiscal; don Luis Benítez Merino, Abogado Fiscal; don Juan José Barrenechea de Castro, Abogado Fiscal; don Leandro Henche García, Abogado Fiscal; don Alfredo Salvador Bosque, Abogado Fiscal; don Antonio González Cuellar García, Abogado Fiscal; don Enrique Abad Fernández, Abogado Fiscal; don Jesús Vicente Chamorro, Abogado Fiscal; don Leopoldo Aranda Calleja, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Guadalajara; don Eugenio López y López, Fiscal; don Antonio Silva Jaraquemada, Abogado Fiscal; don Julio Calvillo Martínez, Magistrado Presidente de la Sala del Tribunal Supremo; don José Beltrán de Heredia Casiano, Magistrado del Tribunal Supremo; don Andrés Gallardo Ros, Magistrado del Tribunal Supremo; don Manuel González Alegre Bernardo, Magistrado del Tribunal Supremo; don José Antonio Seijas Martínez, Magistrado del Tribunal Supremo; don Jaime de Castro García, Magistrado del Tribunal Supremo; don Antonio Sánchez Jauregui, Magistrado del Tribunal Supremo; don Carlos de la Vega Beneyas, Magistrado del Tribunal Supremo; don Jaime Santos Briz, Magistrado del Tribunal Supremo; don José María Gómez de la Bárcena y López, Magistrado del Tribunal Supremo; don Rafael Casares Córdoba, Magistrado del Tribunal Supremo; don José Luis Martín Herrero, Magistrado del Tribunal Supremo; don Julio Fernández Santamaría, Magistrado del Tribunal Supremo; don Fernando Hernández Gil, Magistrado del Tribunal Supremo; don Fernando Monóndez Vives, Magistrado; don Francisco Obregón Barrera, Magistrado; don Ricardo Santolaya Sánchez, Magistrado; don Enrique Presa Santos, Magistrado; don Luis Lerga González, Magistrado; don Elías Dávila Lorenzo, Magistrado; don Jesús Ernesto Peces Morate, Magistrado; don Román García Varela, Magistrado; don Argimiro Domínguez Artega, Magistrado; don Francisco Soto Nieto, Magistrado; don José María Cabanas Gancedo, Magistrado; don Miguel Pérez Capella, Magistrado; don José Antonio Merañón Chavarrí, Magistrado; don Luis Saura Lluvia, Juez de Instrucción; don José Gual Sola, Magistrado; don Joaquín Delgado García, Magistrado; don Ramón Avello Zapatero, Magistrado; don Santiago Pérez Lezasa, Magistrado; don Mariano Pérez Motiva, Magistrado; don Constanza Díez Forniez, Magistrado; don Ernesto Rodrigo de la Llave, Magistrado; don Wenceslao Díez Argal, Magistrado; don Teodoro Sarmiento Hueso, Magistrado; don Antonio Escribano de la Puerta, Magistrado; don José Alvarez de Toledo y Tovar, Magistrado; don Guillermo Raigor Muñoz, Magistrado; don José Manuel Vázquez Sanz, Magistrado; don Agustín del Río Almagro, Magistrado; don Diego Egea Martínez de Hurtado, Magistrado; don Juan Ruiz Rico, Magistrado; don Francisco Soler Vázquez, Magistrado; don Leopoldo Salinas García-Nieto; don Eduardo Salinas Verdager, Juez de Instrucción; don Julián Sánchez Escribano Rico, Juez de Distrito; don Fausto Cartagena González, Juez de Distrito; don Juan Oca Pastor, Juez de Distrito; don José Casanova y Tejera, Juez de Distrito; don José Banto Cabrero, Juez de Distrito; don Bernardino Hernández Blázquez, Juez de Distrito; don Fernando de Chavarrí Revuelta, Juez de Distrito; don Juan Parejo de la Cámara, Juez de Distrito; don José Luis Antón de la Fuente, Juez de Distrito; don José María Bento Company, Juez de Distrito; don José María García Segovia, Juez de Distrito; don José Luis Muñoz Oamiz, Juez de Distrito; don Angel Hernández Corredor, Juez de Distrito; don Antonio Albasanz Callán, Juez de Distrito; don Valero López-Canti y Felez, Juez de Distrito; don Víctor Sierra López, Juez de Distrito; don José Collado Rey, Juez de Distrito; don Matías Cuesta Valdés, Juez de Distrito; don Miguel Cañada Acosta, Juez de Distrito; don Anastasio Herguido Fontecha, Juez de Distrito; don Ricardo Rata Poyatos, Abogado Fiscal del Tribunal Supremo; don Fernando Alamillo Canillas, Fiscal del Tribunal Supremo; don César Camargo Hernández, Fiscal del Tribunal Supremo; don Francisco Corzo Machuca, Fiscal del Tribunal Supremo; don Juan José Navajas Pérez, Fiscal del Tribunal Supremo; don Cándido Conde-Punpodo Ferreiro, Fiscal del Tribunal Supremo; don Gregorio Guijarro Contreras, Fiscal del Tribunal Supremo; don Mariano Fernández Martín Granjo, Fiscal del Tribunal Supremo; don José Antonio Martín Pallín, Fiscal; don Martín Rodríguez Esteban, Fiscal; don José María Rivera Hernández, Fiscal; don José María Paz Rubio, Fiscal; don Rafael Contreras de la Paz, Fiscal; don Valentín Sobrón Fernández, Fiscal; don José Paniagua Gil, Fiscal; don José González Roldán, Fiscal, que han comparecido en autos y defendidos por sí, contra la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, en impugnación de acuerdo del Gobierno de fecha 3 de mayo de 1980, regulador de las retribuciones complementarias del personal al servicio de la Administración de Justicia, y frente a la desestimación presunta

por silencio administrativo del recurso de reposición contra dicho acuerdo formulado, siendo esta última de fecha 20 de agosto de 1981, a la que fue ampliado debidamente el presente recurso, se ha dictado sentencia por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, con fecha 4 de octubre de 1982, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimamos los recursos contencioso-administrativos interpuestos por don Luis Pérez-Lemaur García y demás recurrentes que figuran relacionados en el encabezamiento de esta sentencia contra los puntos 2.º, 3-1, 3-1, párrafo 2, y punto 5.º del acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de mayo de 1980, por ser conformes al ordenamiento jurídico. No se hace expresa condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos (firmada y rubricada).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se publique en el "Boletín Oficial del Estado" e inserte en la "Colección Legislativa".

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 1 de febrero de 1983.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

6081

ORDEN de 1 de febrero de 1983 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 22.553, interpuesto por don Francisco del Campo Rochina.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo con número 22.553, seguido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por don Francisco del Campo Rochina contra la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre liquidación de la cuantía de los trienios efectuada al interesado por el Habilitado, por no haber sido practicada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 70/1978, de 29 de diciembre, al no haberle sido aplicada la cuantía que a la proporcionalidad le corresponde como Auxiliar Diplomado de la Administración de Justicia y ante el silencio administrativo aplicado a la reclamación del referido Auxiliar, se ha dictado sentencia por la mencionada Sala, con fecha 20 de abril de 1982, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando el actual recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Auxiliar de la Administración de Justicia don Francisco del Campo Rochina frente a la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, contra la delegación presunta, producida por silencio administrativo, del Ministerio de Justicia, sobre actualización económica de trienios a que la demanda se contrae, debemos declarar y declaramos no ser conformes a derecho dicho acto administrativo combatido, anulándolo y dejándolo sin efecto, declarando en su lugar el derecho que le asiste a la parte hoy recurrente a que le sean actualizados los trienios que como Auxiliar de Justicia le fueron reconocidos en su día por aquél, y cuyos trienios percibe como parte integrante de sus haberes verificándose tal actualización por virtud de lo establecido en la Orden de veintisiete de marzo de mil novecientos setenta y ocho, cuyos beneficios económicos son de aplicación, con efectos de tal naturaleza, desde el uno de enero de mil novecientos setenta y ocho al treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, por entrar en vigor el uno de enero de mil novecientos ochenta el índice multiplicador único, para el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, conforme a la Ley uno/mil novecientos setenta y ocho, de diecinueve de enero, y en la cuantía que para mil novecientos setenta y nueve establece el Real Decreto-ley setenta/mil novecientos setenta y ocho, de veintinueve de diciembre; todo ello, sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas por este proceso jurisdiccional.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos (firmada y rubricada).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada condena.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 1 de febrero de 1983.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.